



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

## CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CT-CI/A-37-2023

### INSTANCIAS VINCULADAS:

- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO PATRIMONIAL
- UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al **seis de septiembre de dos mil veintitrés**.

### ANTECEDENTES:

**I. Solicitud de información.** El uno de agosto de dos mil veintitrés se recibió la solicitud tramitada en la Plataforma Nacional de Transparencia registrada bajo el folio **330030523001766**, requiriendo:

*“Solicito a la autoridad y al Órgano Interno de Control de dicha institución la siguiente información:*

- 1) *¿Cuántas y cuáles son los números de los expedientes de las investigaciones de oficio que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas (graves y no graves)?*
- 2) *¿Cuántas y cuáles son los números de los expedientes de las investigaciones que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas (graves y no graves) derivadas de una denuncia?*
- 3) *¿Cuántas y cuáles son los números de los expedientes de las investigaciones que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas (graves y no graves) derivadas de una auditoría?*
- 4) *¿Cuántos y cuáles son los números de los expedientes de los acuerdos de conclusión y archivo sin responsabilidad que han sido emitidos por presuntas faltas administrativas (graves y no graves)?*
- 5) *¿Cuántos y cuáles son los números de los expedientes de los acuerdos de conclusión donde se encontró una falta administrativa no grave que han sido emitidos?*

*Conforme a cada expediente administrativo, precisados anteriormente, se solicita la siguiente información debidamente relacionada:*

- a. Número de expediente.
- b. Etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento, al día de la entrega de información.
- c. Fecha de inicio de la investigación.
- d. Fecha de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves.
- e. Sentido de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves.
- f. Fecha de calificación de la falta administrativa grave, y fecha del envío del procedimiento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- g. Nombre completo de la persona física o moral sancionada.
- h. Sexo de la persona sancionada, tratándose de personas físicas y servidores públicos.
- i. Falta administrativa grave o no grave, que se imputa.
- j. Tipo de falta administrativa grave o no grave, que se imputa.
- k. Tipo de sanción impuesta.
- l. En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de inicio de la sanción.
- m. En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de término o conclusión de la sanción.
- n. En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es el período por el que se sancionó.

Solicito la información desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud. Indicando las cantidades y datos por año.

Además, solicito la información detallada conforme a los puntos anteriores del periodo del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022.

Solicito que la información se desglose por área o unidad administrativa que tenga facultades, atribuciones o competencias en la materia, ya sea que surja de los sistemas o archivos de cada una de las áreas o de los sistemas de información agregada y concentrada con que cuenta la dependencia.

Se solicitan las versiones públicas digitalizadas de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritos con anterioridad:

- a. Las denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.
- b. Los acuerdos de radicación con motivo del inicio de investigaciones administrativas desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.
- c. Los acuerdos de calificación de faltas administrativas dictados desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.
- d. Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.
- e. Los acuerdos que contengan las sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves, dictados desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.



*Si la información ya obra en fuentes de acceso público solicitamos se nos indique el procedimiento para acceder a las mismas.” [sic]*

**II. Acuerdo de admisión.** Por acuerdo uno de agosto de dos mil veintitrés, la Unidad General de Transparencia y Sistematización de Información Judicial (Unidad General de Transparencia), una vez analizados la naturaleza y contenido de la solicitud, la determinó procedente y ordenó abrir el expediente electrónico **UT-A/0507/2023**.

**III. Requerimientos de información.** Por oficio electrónico UGTSIJ/TAIPDP-3993-2023 enviado el dos de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Unidad General de Transparencia requirió a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial (DGRARP) y a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) para que se pronunciaran sobre la existencia de la información solicitada y, en su caso, su clasificación.

**IV. Solicitud de prórroga por parte de la UGIRA.** Por oficio UGIRA-A-124-2023 de nueve de agosto de dos mil veintitrés, la instancia referida solicitó una ampliación del plazo, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento.

**V. Solicitud de prórroga por parte de la DGRARP.** Por oficio CSCJN/DGRARP-TAIPDP/583/20230 enviado el diez de agosto de dos mil veintitrés, la instancia referida solicitó una ampliación del plazo, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento.

**VI. Informe de la UGIRA.** Por oficio electrónico UGIRA-A-131-2023 de catorce de agosto de dos mil veintitrés, la Unidad vinculada informó lo siguiente:

*“En cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés dictado en el cuadernillo de respuesta a solicitud de transparencia SCJN/UGIRA/C.TRANSparencia/32-2023 del índice de la Unidad General a mi cargo, relativo al expediente UT-A/0507/2023, con respecto a la solicitud de*

información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 330030523001766, por este medio remito el informe solicitado de conformidad con lo siguiente:

Para una mejor comprensión del presente informe, en principio es necesario precisar los alcances de la solicitud, esto es, en una primera parte (identificada con números del 1 al 5) la persona peticionaria requiere por el periodo comprendido del 19 de julio de 2016 (fecha que identifica como aquella en la que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas), a la fecha de la solicitud (1 de agosto de 2023) que se le proporcione la cantidad y el número de expediente de desagregado por año y por falta grave o no grave de las investigaciones iniciadas, conclusión y archivo.

En la segunda parte de la solicitud (identificada con incisos del a al n) pide que se proporcione la información relativa a los expedientes precisados en la primera parte, esto es, de las investigaciones iniciadas y determinaciones de conclusión y archivo con la información desagregada que especifica, por el periodo del 1 de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

Por último, en la tercera parte (correspondiente a los incisos a al e) solicita la versión pública digitalizada de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritos con anterioridad, es decir, los relativos a investigaciones iniciadas, en los que se emitió informe de presunta responsabilidad administrativa, se concluyó y archivo [sic] el expediente, específicamente de las actuaciones que precisa en los incisos del a) al e).

En ese sentido, para dar respuesta a la solicitud cabe aclarar que, la Ley General de Responsabilidades fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y en términos de los artículos transitorios primero y tercero, esta ley entró en vigor al año siguiente de su publicación, es decir el 18 de julio de 2017<sup>1</sup>, no así, el 19 de julio de 2016 como lo indica la persona solicitante.

Por virtud de lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 9, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas<sup>2</sup>, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advirtió la necesidad de realizar los ajustes al marco normativo interno de este Alto Tribunal, tendentes a establecer el sistema adjetivo de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre lo que se destaca la separación del procedimiento administrativo en tres fases: investigación, substanciación y resolución, correspondiendo la conducción de cada una de ellas a distintas autoridades, -investigadora, substanciadora y resolutora-.

Ahora, en el contexto del régimen normativo previsto por el artículo 9, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de adecuarse al nuevo sistema de responsabilidades administrativas,

<sup>1</sup> [https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016#gsc.tab=0](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016#gsc.tab=0)

**Ley General de Responsabilidades Administrativas Transitorios**

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

(...)

**Tercero.** La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

(...)

**Ley General de Responsabilidades Administrativas**

**Artículo 9.** En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: [...]

V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y [...]



mediante Acuerdo General 1/2018 del veinte de febrero de dos mil dieciocho del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>3</sup>, se modificaron y adicionaron diversos artículos del entonces Reglamento Orgánico en Materia de Administración de este Alto Tribunal, por lo que -entre otras cuestiones- se creó la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

En ese tenor, a esta Unidad General le corresponde actuar en carácter de autoridad investigadora, por ende, en ejercicio de las atribuciones conferidas al tenor de la ley marco en comento y la normativa interna de este Alto Tribunal, específicamente lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>4</sup>, conoce exclusivamente de la fase de investigación.

Por consiguiente, la solicitud se atenderá en el ámbito de atribuciones de esta Unidad General, esto es, lo correspondiente a los expedientes que obren en los archivos relativos a la fase de investigación en materia de responsabilidades administrativas, es decir, lo requerido en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, los incisos a), b) y c)<sup>5</sup>, -segunda parte de la solicitud-, así como lo relativo a las versiones públicas de las constancias señaladas en los incisos a) y b) -tercera parte de la solicitud-.

<sup>3</sup> 'Artículo Primero. El presente Acuerdo General entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación. (...)'

<sup>4</sup> **Artículo 14.** La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas tendrá las atribuciones siguientes:

**I.** Recibir y tramitar quejas o denuncias sobre hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas, así como proponer áreas de fácil acceso a la denuncia, de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables;

**II.** Proponer a la Secretaría General de la Presidencia la realización de investigaciones de responsabilidades administrativas por la posible comisión de faltas administrativas de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

**III.** Llevar a cabo las investigaciones que sean autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

**IV.** Decretar, en su caso, la conclusión anticipada de la investigación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

**V.** Realizar las diligencias, notificaciones y actuaciones necesarias para integrar la investigación, por conducto de la persona titular de la Unidad General o del personal que habilite para tal efecto, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**VI.** Practicar las visitas de verificación necesarias para la investigación de faltas administrativas, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

**VII.** Requerir información o documentación a cualquier persona física o moral para la integración de las investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas, incluyendo a las instituciones competentes en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**VIII.** Imponer y decretar las medidas de apremio y de protección de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables;

**IX.** Realizar todas aquellas actuaciones y diligencias con el fin de esclarecer los hechos, preservar los datos de prueba, así como para impedir que los elementos materia de la investigación se pierdan, oculten, destruyan o alteren;

**X.** Determinar la existencia o inexistencia de faltas administrativas y, en su caso, proponer su calificación de graves o no graves, a partir de la información recabada durante la investigación;

**XI.** Elaborar y someter a la consideración de la Secretaría General de la Presidencia, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa proponiendo la calificación de la gravedad de la falta, el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, y las demás determinaciones que establecen las disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda;

**XII.** Atender, tramitar e investigar las denuncias o quejas por acoso u hostigamiento laboral y/o sexual, en su caso, con el acompañamiento de las áreas competentes;

**XIII.** Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la autoridad competente, en los casos a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y

**XIV.** Recibir y tramitar los recursos que corresponden al ámbito de competencia de la autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables.'

<sup>5</sup> 'a) Número de expediente.

b) Etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento, al día de la entrega de información.

c) Fecha de inicio de la investigación.

(...).'

Lo anterior a partir del momento en que cobró vigencia el Acuerdo General de Administración I/2018 (21 de febrero de 2018) en los apartados que haga referencia a que la información se pide a partir de la entrada en vigor [sic] la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin que esta Unidad General sea competente para pronunciarse respecto a la información solicitada en los incisos e), f), g), h), i), j), k), l), m) y n)<sup>6</sup> -segunda parte de la petición-; así como lo relativo a las versiones públicas de las constancias referidas por la persona solicitante en el inciso y e)<sup>7</sup> [sic] -tercera parte de la petición-, ello en virtud de que escapa a la competencia de esta Unidad General en tanto que hace referencia a cuestiones ajenas a la etapa de investigación en materia de responsabilidades administrativas de este Alto Tribunal, por las razones ya expuestas.

Cabe precisar que respecto a los informes de presunta responsabilidad administrativa elaborados que se precisan en los incisos c) y d)<sup>8</sup> de la tercera parte de la solicitud en la que pide versiones públicas, si bien a esta autoridad investigadora corresponde la atribución de emitir tales informes al tenor de lo establecido en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también lo es que esas actuaciones no obran en los archivos de esta Unidad General de conformidad con el artículo 10 de la mencionada ley, estos informes son presentados a la autoridad substanciadora junto con las constancias de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa para que proceda conforme al ámbito de sus atribuciones.

Es así que, de la revisión de los registros y expedientes que obran en los archivos de esta Unidad General se advierte que no se cuenta con la información desagregada en la manera que la solicita la persona peticionaria, pues no tiene la obligación de llevar un registro en la forma que se precisa en la solicitud que se atiende, ni desagregada por falta grave o no grave, por consiguiente el documento que contenga tales datos es inexistente al igual que la información numérica relativa a las investigaciones iniciadas y determinaciones de conclusión y archivo por falta grave y no grave.

Sin embargo, se cuenta con la información cuantitativa que en seguida se relaciona:

- Puntos 1, 2 y 3 de la solicitud.

Al respecto se reitera que esta Unidad General no cuenta con la obligación de elaborar un registro de las investigaciones iniciadas desagregado por falta grave o no grave, además de que es hasta que esta autoridad investigadora emite un informe de presunta responsabilidad administrativa con fundamento en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

<sup>6</sup> (...)

d) Fecha de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves.

e) Sentido de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves.

f) Fecha de calificación de la falta administrativa grave, y fecha del envío del procedimiento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

g) Nombre completo de la persona física o moral sancionada.

h) Sexo de la persona sancionada, tratándose de personas físicas y servidores públicos.

i) Falta administrativa grave o no grave, que se imputa.

j) Tipo de falta administrativa grave o no grave, que se imputa.

k) Tipo de sanción impuesta.

l) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de inicio de la sanción.

m) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de término o conclusión de la sanción.'

n) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es el período por el que se sancionó.

(...)'

<sup>7</sup> (...)

e) Los acuerdos que contengan las sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves, dictados desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud

<sup>8</sup> (...)

c) Los acuerdos de calificación de faltas administrativas dictados desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.

d) Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados desde la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.'



cuando se califica la gravedad de la falta, por lo tanto, **es inexistente esa información.**

En ese sentido, de los registros y expedientes que obran en los archivos de esta Unidad General, esta área considera como información pública el dato cuantitativo de lo solicitado en los puntos 1, 2 y 3, puesto que su difusión no implica revelar información concerniente a la investigación, por tanto, el total de investigaciones iniciadas del 21 de febrero de 2018<sup>9</sup> al 1 de agosto de 2023<sup>10</sup> son un total de **150** expedientes, los cuales corresponden a **81** de oficio, **53** por denuncia **16** derivados de auditoría.

|           | 21 de febrero de 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Al 1 de agosto de 2023 |
|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------|
| De oficio | 11                    | 29   | 6    | 8    | 16   | 11                     |
| Denuncia  | 1                     | 2    | 15   | 14   | 14   | 7                      |
| Auditoría | 0                     | 4    | 2    | 6    | 4    | 0                      |

• Puntos 4 y 5 de la solicitud.

Respecto a la información solicitada de los acuerdos de conclusión y archivo 'sin responsabilidad' que han sido emitidos por presuntas faltas administrativas graves y no graves y en específico donde 'se haya encontrado' una falta administrativa no grave, es preciso aclarar que en el ámbito de atribuciones de esta autoridad investigadora, al tenor de lo establecido en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez concluidas las diligencias de investigación, se analizan los elementos de convicción recabados y en el caso de advertir infracciones constitutivas de faltas administrativas se emite el informe de presunta responsabilidad administrativa y se califica la falta de grave o no grave.

Sin embargo, conforme al propio dispositivo legal en cita, al no existir elementos suficientes para acreditar la infracción y presunta responsabilidad se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente.

De lo anterior se obtiene que en esos supuestos no se lleva a cabo la calificación de la gravedad a que hace referencia la persona solicitante.

Por consiguiente, la información solicitada respecto a los acuerdos de conclusión y archivo desagregados por falta grave o no grave **es inexistente.**

En ese sentido, de los registros y expedientes que obran en los archivos de esta Unidad General, esta área considera como información pública el dato cuantitativo de lo solicitado, puesto que su difusión no implica revelar información concernientes [sic] a la investigación, por lo tanto, el total de acuerdos de conclusión y archivo dictados [sic] 21 de febrero de 2018 al 1 de agosto de 2023 son un total de **71** expedientes.

| 21 de febrero de 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Al 1 de agosto de 2023 |
|-----------------------|------|------|------|------|------------------------|
| 0                     | 16   | 7    | 17   | 27   | 4                      |

• Incisos de la segunda parte de la solicitud.

En los incisos a), b) y c) de la segunda parte de la solicitud se pide el número de expediente, etapa procesal y fecha de inicio de la investigación por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

<sup>9</sup> Fecha en la que cobró vigencia el Acuerdo General de Administración I/2018.

<sup>10</sup> Fecha de la presentación de la solicitud.

En relación con lo anterior, de la revisión de los registros y expedientes que obran en los archivos de esta Unidad General se advierte que sobre lo solicitado en los incisos a), b) y c) -segunda parte de la petición- en relación con los numerales del 1 al 5, se trata de información reservada como se precisará en el apartado siguiente, y esta autoridad investigadora únicamente se encuentra en aptitud legal de proporcionar la información de un expediente, toda vez que no se actualiza alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ende se considera como información de carácter pública, dado que no opera plazo de prescripción a que se refiere el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por la naturaleza del propio asunto<sup>11</sup>.

Dicho expediente corresponde al registrado con número SCJN/UGIRA/EPRA/99-2022, en el cual se dictó el acuerdo de inicio de investigación el 29 de abril de 2022 y se encuentra en estatus de archivado.

- Constancias solicitadas en versión pública.

En la tercera parte de la solicitud, en los incisos a) y b), la persona peticionaria requirió la versión pública digitalizada de las denuncias presentadas y acuerdos de radicación que dieron motivo al inicio de la investigación que obran en los expedientes donde se inició la investigación y se dictó acuerdo de conclusión, por el periodo comprendido de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta la fecha en que se presentó la solicitud.

En los archivos de esta Unidad General fueron localizados tres expedientes susceptibles de proporcionar en versión pública las constancias solicitadas, y que corresponden a los expedientes SCJN/UGIRA/99-2022, SCJN/UGIRA/7-2019 y su acumulado SCJN/UGIRA/22-2019.

En relación con lo anterior, se precisa que la persona solicitante pide el acuerdo de radicación con motivo del inicio de investigación, lo que se traduce en dos actuaciones distintas en tanto que una se emite en primer término cuando se recibe la denuncia, se le asigna un número y se instruye integrar el expediente, y otra se dicta en un momento posterior cuando se ordena iniciar con la práctica de diligencias para investigar, derivado del análisis preliminar que lleva a cabo esta autoridad investigadora de las conductas denunciadas indicios y evidencias con los que se cuenta en ese momento y la correspondiente autorización de la entonces Secretaría General de la Presidencia<sup>12</sup>.

En ese tenor se advierte que los documentos relativos a las denuncias con los correspondientes anexos, auto de radicación y auto que da inicio a la investigación da un total de **844 hojas**, y toda vez que contienen datos [sic] confidenciales como nombres y cargos de las personas denunciadas, denunciantes y testigos, así como datos personales de quienes intervinieron en el expediente, resulta necesario imprimir, testar y digitalizar las constancias para la entrega de la versión pública.

Por lo tanto, el costo de la versión pública solicitada asciende al costo de \$422.00 (cuatrocientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional).

- Información reservada.

Por actualizarse el supuesto del artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los expedientes que se encuentran en trámite y aquellos susceptibles de reabrirse porque en términos del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se

<sup>11</sup> CT-CI-J-18-2022.

<sup>12</sup> De conformidad con lo establecido en el artículo segundo del Acuerdo General de Administración I/2023, DE LA PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR EL QUE SE MODIFICAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DIVERSAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA; en la actualidad corresponde a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia autorizar el informe de presunta responsabilidad administrativa.



*encuentra transcurriendo el plazo de prescripción para la imposición de la sanción, son de carácter reservado.*

*En ese contexto se considera que de esas investigaciones los datos relativos a los números de expediente, etapa procesal y fecha de inicio de la investigación, así como los documentos solicitados en versión pública de la denuncia, auto de radicación y de inicio de la investigación.*

*Ello es así en virtud de que, como se ha pronunciado el Comité de Transparencia de este Alto Tribunal<sup>13</sup> el derecho administrativo sancionador es parte del ius puniendi del Estado, a partir de la base de que tanto el derecho administrativo como el derecho penal constituyen dos manifestaciones de esa potestad punitiva del Estado, tal como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

*Por lo que, del mismo modo que en la fase de investigación del proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores lo que se busca salvaguardar son las investigaciones, así como la garantía del debido proceso, tutelando en todo momento los derechos de quienes intervienen en el procedimiento sancionador, con la principal intención de evitar que se filtren datos o elementos que pudieran poner en riesgo las investigaciones en curso, o que se destruyan elementos de convicción.*

*De manera que, la divulgación de la información solicitada conllevaría un riesgo real, demostrable e identificable por cuanto a la sana e imparcial integración de los procedimientos administrativos, desde su apertura hasta su total conclusión, en el entendido de que, en principio, en ese lapso, las constancias [sic] los integran sólo atañen a las personas que intervienen como denunciantes y denunciadas.*

*Además de que se debe velar por el correcto equilibrio del procedimiento, evitando cualquier injerencia externa que suponga una alteración a ese esquema y a la objetividad.*

#### **Prueba de daño**

*La divulgación de la información implica el riesgo de que se genere la materialización de un efecto nocivo en la conducción de un expediente de procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, previo a que cause estado; además de aquellos que aun cuando esta Unidad General haya dictado un acuerdo de conclusión y archivo, se encuentre transcurriendo el plazo para la prescripción de las facultades para imponer las sanciones, tal como lo establece el artículo 100, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.*

*Ello porque, la divulgación de la información previo a que concluya la fase de investigación, conllevaría un riesgo real, demostrable e identificable respecto al ejercicio equilibrado de los derechos de las personas que intervienen, además de que pondría en riesgo la autonomía y libertad deliberativa de esta Unidad General.*

*Sumado a la necesidad de preservar la independencia y objetividad de esta autoridad investigadora, en el entendido que revelar la información de dichos procedimientos generaría posibles riesgos ya que los receptores de la información podrían construir su postura que pudiera influir en las determinaciones que se tomen por las autoridades competentes, lo que puede llevar a diversas formas de presión.*

*Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que intervienen en la investigación desde su ánimo individual, puedan divulgar el contenido de sus*

<sup>13</sup> CT-CI-J-43-2021, resuelto el ocho de diciembre de dos mil veintiuno.

actos a través de distintos medios, pues lo que exige la causal de reserva es la protección en la conducción del expediente judicial, con independencia de lo que decidan exteriorizar los involucrados.

En ese sentido, se estima que el plazo de reserva de esa información será de cinco años previsto como máximo en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con independencia de que con posterioridad se pueda ampliar previa autorización del Comité de Transparencia.

[...]"

**VII. Alcance al oficio UGIRA-A-131-2023.** Por oficio electrónico **UGIRA-A-134-2023** de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la Unidad vinculada informó lo siguiente:

*“En alcance al oficio UGIRA-A-131-2023, y en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés dictado en el cuadernillo de respuesta a solicitud de transparencia SCJN/UGIRA/C.TRASPARENCIA/32-2023 del índice de la Unidad General a mi cargo, relativo al expediente UT-A/0507/2023, con respecto a la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 330030523001766, se hace de su conocimiento que:*

*En las constancias de dicho expediente se advierte que mediante oficio UGIRA-A-131-2023 de catorce de agosto de dos mil veintitrés, enviado con la misma fecha vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia y Sistematización de la Información de este Alto Tribunal, esta Unidad General informó, entre otros aspectos; que de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa SCJN/UGIRA/EPRA/7-2019 y su acumulado SCJN/UGIRA/EPRA/22-2019, así como el SCJN/UGIRA/EPRA/99-2022 diversas constancias que fueron requeridas por la persona solicitante son susceptibles de proporcionarse en versión pública.*

*En ese contexto, se hace de su conocimiento que mediante oficio UGIRA-A-91-2023 de dieciséis de junio del año en curso, esta Unidad General estimó que no prevalecen las causas de reserva en los expedientes de presunta responsabilidad administrativa SCJN/UGIRA/EPRA/7-2019 y su acumulado SCJN/UGIRA/EPRA/22-2019<sup>14</sup>, así como el expediente SCJN/UGIRA/EPRA/99-2022<sup>15</sup>. Esa desclasificación de la información reservada se reflejó en el índice de documentos reservados publicado en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualizado a junio de dos mil veintitrés, derivado de la aprobación emitida por el Comité de Transparencia de cinco de julio de dos mil veintitrés<sup>16</sup>.*

[...]"

<sup>14</sup> Previamente el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de reserva de la información en el expediente CT-CUM/J-6-2021.

<sup>15</sup> Previamente el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de reserva de la información en el expediente CT-CI/J-18-2022.

<sup>16</sup> Consultable en el enlace electrónico [Índice-deExpedientes-clasificados-como-reservados1er-Semestre-2023.pdf \(scjn.gob.mx\)](#) Localizable en el número 143 y 251 respectivamente del índice de reserva de la SCJN actualizado a junio de 2023.



**VIII. Ampliación del plazo global del procedimiento.** En sesión ordinaria de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés el Comité de Transparencia autorizó ampliar el plazo ordinario de resolución de la presente solicitud de información.

**IX. Informe de la DGRARP.** Por oficio electrónico **CSCJN/DGRARP-TAIPDP/607/2023**, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la instancia referida informó lo siguiente:

*“Con fundamento en el artículo 16 del Acuerdo General de Administración 5/2015, en atención al oficio UGTSIJ/TAIPDP-3993- 2023, se emite pronunciamiento sobre la solicitud con folio 330030523001766.*

**Consideraciones previas**

*Debido a que en la solicitud se hace referencia a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), se precisa que conforme al artículo Primero transitorio<sup>17</sup> del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, por el que se expidió, entre otros ordenamientos, la LGRA, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de esa publicación, esto es, el 19 de julio de 2016, pero de conformidad con los párrafos primero y último del artículo Tercero transitorio<sup>18</sup> del propio decreto, esa ley general entró en vigor al año siguiente, el 19 de julio de 2017, no el 16 de julio de 2016 como se afirma en la solicitud.*

*Por tanto, para atender la solicitud se toma en cuenta el 19 de julio de 2017, como la fecha en que la LGRA comenzó su vigencia.*

*Conforme a lo anterior, a partir del 19 de julio de 2017 que entró en vigor la LGRA, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial (DGRARP) no realiza investigaciones, ya que esa ley general prevé que la investigación y la substanciación de las faltas de responsabilidad administrativa no pueden recaer en la misma autoridad, de ahí que esta área solo funge como autoridad substanciadora en términos del artículo 38, fracciones VIII y IX<sup>19</sup>, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ROMA), así como los artículos 2, fracción IV<sup>20</sup>, del Acuerdo General de Administración V/2020,*

<sup>17</sup> **Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.’

<sup>18</sup> **Tercero.** La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. (...) Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.’

<sup>19</sup> **Artículo 38.** La Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

**VIII.** Fungir como autoridad substanciadora en los procedimientos de responsabilidad administrativa, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables;

**IX.** Fungir como autoridad substanciadora en los asuntos de acoso u hostigamiento laboral y/o sexual, en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables;’

<sup>20</sup> **Artículo 2.** Para los efectos de este Acuerdo General de Administración, además de las definiciones previstas el Acuerdo General 9/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entenderá por:

(...)

DÉCIMO, fracción I<sup>1</sup>, del Acuerdo General de Administración IX/2021 y 5, fracción I<sup>2</sup>, del Acuerdo General de Administración I/2022.

Las facultades de investigación las tiene asignadas la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), de conformidad con los artículos 14 del ROMA y 2, fracción II, del Acuerdo General de Administración V/2020, así como el Acuerdo General de Administración IX/2019, por lo que se considera que dicha área es competente para, en su caso, pronunciarse sobre la información relativa a esa función.

En ese orden de ideas, cabe precisar que del 19 de julio de 2017 al 20 de febrero de 2018, en que se creó la UGIRA, la Dirección General de Auditoría (DGA) fue el área que llevó a cabo las investigaciones de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo ordenado en acuerdo del Ministro Presidente en 3 expedientes, lo que se considera en este oficio para atender el principio de máxima publicidad y facilitar que las solicitudes se atiendan en un procedimiento sencillo.

Expuestas las consideraciones que preceden, con base en la información proporcionada por la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas, se emite pronunciamiento sobre la solicitud.

**‘1) ¿Cuántas y cuáles son los números de los expedientes de las investigaciones de oficio que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas (graves y no graves)?**

**2) ¿Cuántas y cuáles son los números de los expedientes de las investigaciones que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas (graves y no graves) derivadas de una denuncia?**

**3) ¿Cuántas y cuáles son los números de los expedientes de las investigaciones que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas (graves y no graves) derivadas de una auditoría?’**

Conforme a lo expuesto en las consideraciones previas de este oficio, la DGRARP no ha iniciado expedientes de investigación puesto que no tiene competencia para realizar investigaciones de responsabilidad administrativa.

Luego, atendiendo al principio de máxima publicidad, ya que la DGA es un área adscrita a la Contraloría, para facilitar que las solicitudes se atiendan en un procedimiento sencillo y considerando que se tienen en resguardo los procedimientos de responsabilidad administrativa que derivaron de esos expedientes de investigación, se informa que del 19 de julio de 2017 al 20 de febrero de 2018, en que se creó la UGIRA, la DGA realizó **3** investigaciones de responsabilidad administrativa y en el **anexo 1** de este oficio se presenta el número de los expedientes de investigación, así como el número de procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

---

IV. Autoridad substanciadora: la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;’ (...)

<sup>21</sup> **ARTÍCULO DÉCIMO.** La Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial tendrá las atribuciones siguientes en relación con el objeto de este acuerdo:  
(...)

II. Fungir como autoridad substanciadora en el procedimiento de responsabilidad administrativa por acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual o de género, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y las demás disposiciones jurídicas aplicables;’ (...)

<sup>22</sup> **Artículo 5.** La Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial tendrá las atribuciones siguientes:  
(...)

II. Fungir como autoridad substanciadora en el procedimiento de responsabilidad administrativa por acoso laboral de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la Ley Orgánica y las demás disposiciones jurídicas aplicables;’ (...)



- ‘4) ¿Cuántos y cuáles son los números de los expedientes de los acuerdos de conclusión y archivo sin responsabilidad que han sido emitidos por presuntas faltas administrativas (graves y no graves)?**  
**5) ¿Cuántos y cuáles son los números de los expedientes de los acuerdos de conclusión donde se encontró una falta administrativa no grave que han sido emitidos?’**

De conformidad con lo señalado en los artículos 14, fracciones IV y XI<sup>23</sup>, del ROMA y 7<sup>24</sup> del Acuerdo General de Administración IX/2019, la UGIRA emite los acuerdos de conclusión de la investigación; por tanto, esta área no cuenta con la información solicitada en las dos preguntas antes transcritas, sino que se estima que podría corresponder a las atribuciones de la UGIRA.

En otra parte de la solicitud se pide:

**‘Conforme a cada expediente administrativo, precisados anteriormente, se solicita la siguiente información debidamente relacionada:**

- a) Número de expediente.**
- b) Etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento, al día de la entrega de información.**
- c) Fecha de inicio de la investigación.**
- d) Fecha de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves.**
- e) Sentido de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves.**
- f) Fecha de calificación de la falta administrativa grave, y fecha del envío del procedimiento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.**
- g) Nombre completo de la persona física o moral sancionada.**
- h) Sexo de la persona sancionada, tratándose de personas físicas y servidores públicos.**
- i) Falta administrativa grave o no grave, que se imputa.**
- j) Tipo de falta administrativa grave o no grave, que se imputa.**
- k) Tipo de sanción impuesta.**
- l) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de inicio de la sanción.**
- m) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de término o conclusión de la sanción.**
- n) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es el período por el que se sancionó.’**

<sup>23</sup> **‘Artículo 14.** La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

**IV.** Decretar, en su caso, la conclusión anticipada de la investigación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

(...)

**XI.** Elaborar y someter a la consideración de la Secretaría General de la Presidencia, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa proponiendo la calificación de la gravedad de la falta, el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, y las demás determinaciones que establecen las disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda;’

(...)

<sup>24</sup> **‘Artículo 7.** Al concluir las diligencias de investigación, la UGIRA dictará el auto de conclusión respectivo y, en uso de sus atribuciones, emitirá el dictamen de cierre de investigación o el informe de presunta responsabilidad administrativa, según corresponda, previa autorización de la Secretaría General.

La comunicación entre la UGIRA y la Secretaría General se llevará a cabo por cualquier medio, incluso por mecanismos electrónicos mediante el uso de la FIREL.’

Tomando en cuenta que en las preguntas previas se solicitan expedientes de investigación y que esta dirección general no es competente para realizar investigaciones de responsabilidad administrativa, como ya se mencionó, en observancia del principio de máxima publicidad, se atiende este apartado respecto de los 3 procedimientos de responsabilidad administrativa que derivaron de las investigaciones realizadas por la DGA, de los cuales, 1 aún está en trámite (precisado en el **anexo 2**), por lo que no es posible entregar la información solicitada en ese apartado respecto de ese procedimiento, ya que de conformidad con los artículos 113, fracciones IX y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso Público (LGT) y 110, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso Público (LFT) constituyen información temporalmente reservada, lo cual ha sido confirmado por el Comité de Transparencia al resolver, entre otros, los expedientes CT-CI/J-43-2021, CT-CI/J-18-2022 y CT-CI/J-28-2023.

Con base en las precisiones hechas, en el anexo 3 se proporciona la información correspondiente a 2 procedimientos de responsabilidad administrativa con resolución definitiva, que tuvieron como origen el IPRA emitido por la DGA, que fue la instancia que realizó la investigación.

En el anexo 3 se pone a disposición la información de los dos procedimientos concluidos (inciso b), señalando el número de expediente (inciso a); la fecha de inicio de la investigación, que se obtuvo del expediente, aunque no se trata de una actuación realizada por la DGRARP (inciso c); la fecha de la resolución definitiva (inciso d); el sentido de la resolución (inciso e); la fecha del informe de presunta responsabilidad administrativa, que corresponde a la fecha de calificación de la falta administrativa, de conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la LGRA (inciso f); hipótesis normativa de la falta administrativa por la que se siguió el procedimiento, lo que corresponde al tipo de falta (inciso j); y, clasificación de la falta en grave o no grave (inciso i).

Ahora bien, en el inciso f) se pide **la fecha del envío del procedimiento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa**, respecto de lo cual se señala que de conformidad con el artículo 113, fracciones I y II<sup>25</sup>, de la LOPJF, las autoridades resolutoras de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la SCJN son la Ministra Presidenta tratándose de faltas no graves y el Pleno tratándose de faltas graves, por lo que los expedientes de investigación en que, en su caso, se emite un IPRA no son enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Por otra parte, no es posible proporcionar otros datos que se mencionan en ese apartado de la solicitud, pues de conformidad con los artículos 27, párrafo cuarto<sup>26</sup>, de la LGRA; 52 y 53<sup>27</sup>, de la Ley General del Sistema Nacional

<sup>25</sup> **Artículo 113.** Serán competentes para conocer de las responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, como autoridades resolutoras en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para aplicar las sanciones administrativas que correspondan:

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, tratándose de faltas de las y los ministros y de las faltas graves cometidas por sus personas servidoras públicas;

II. El presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de personas servidoras públicas de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior; (...) )

<sup>26</sup> **Artículo 27.** (...) En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley. (...) )

<sup>27</sup> **Artículo 52.** El sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.



*Anticorrupción, así como el criterio relativo a la fracción XVIII del artículo 70 de la LGT contenido en el 'ANEXO I - - - OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS - - - Criterios para las obligaciones de transparencia comunes' de los 'Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia', solo son públicas las sanciones administrativas de inhabilitación cuando sean firmes y constituyan faltas graves, por lo que aquellas sanciones derivadas de faltas administrativas no graves sólo deben registrarse, pero no son públicas.*

*Con base en lo anterior, no se proporciona el **nombre de las personas responsables** (inciso g), de los procedimientos ya resueltos, porque en ningún caso se trata de sanciones de inhabilitación impuestas por la comisión de falta grave.*

*Respecto de '**k) Tipo de sanción impuesta**', '**l) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de inicio de la sanción**', '**m) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de término o conclusión de la sanción**' y '**n) En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es el período por el que se sancionó**', de los 2 procedimientos concluidos que se informan, se debe tener en cuenta lo señalado previamente, acerca de que solo son públicas las sanciones que consistan en inhabilitación y deriven de faltas graves y los asuntos que se listan en el anexo 3 no se ubican en los supuestos normativos mencionados en los párrafos que anteceden, por tanto, dicha información es confidencial, con apoyo en los artículos 116 de la LGT y 113 de la LFT, en relación con los artículos 27, párrafo cuarto, de la LGRA, 52 y 53, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el criterio relativo a la fracción XVIII del artículo 70 de la LGT contenido en el 'ANEXO I - - - OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS - - - Criterios para las obligaciones de transparencia comunes' de los 'Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia'.*

*De conformidad con los artículos 116 de la LGT, 113, fracción I, de la LFT y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se clasifica como confidencial el dato que se pide en el inciso '**h) Sexo de la persona sancionada, tratándose de personas físicas y servidores públicos**', pues se trata de un dato personal sensible, que revela aspectos de la vida íntima de la persona, sin que se advierta obligación normativa de hacer pública esa información en algún caso.*

*En la parte final de la solicitud se pide lo siguiente:*

**'Se solicitan las versiones públicas digitalizadas de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritos con anterioridad, tramitados por faltas administrativas graves y no graves, lo siguiente:**

---

**Artículo 53.** Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas'

- a) **Las denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.**
- b) **Los acuerdos de radicación con motivo del inicio de investigaciones administrativas desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.**
- c) **Los acuerdos de calificación de faltas administrativas dictados desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.**
- d) **Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.**
- e) **Los acuerdos que contengan las sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves, dictados desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (19 de julio de 2016) y hasta la fecha de la presente solicitud.'**

Como se mencionó, a partir del 19 de julio de 2017 en que entró en vigor la LGRA, la DGRARP no realiza investigaciones. Sin embargo, considerando que se tienen en resguardo los expedientes de investigación en que se dictó el IPRA que dio lugar a que se iniciaran los procedimientos de responsabilidad administrativa que competen a esta instancia como autoridad substanciadora, es posible pronunciarse respecto de los dos procedimientos que conciernen a esta solicitud y que cuentan con resolución que se ha declarado definitiva.

Al respecto, se precisa que los documentos relativos al primer acuerdo dictado en el expediente de investigación (inciso b); en su caso, la queja o denuncia (inciso a); y, el IPRA, que además es el acuerdo en que se calificó la falta (incisos c y d), solo se pueden poner a disposición en versión pública los correspondientes a los 2 expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa en los que la DGA realizó la investigación, con motivo de la entrada en vigor de la LGRA el 19 de julio de 2017, con resolución declarada definitiva que se tienen en resguardo en esta área, pues contienen, entre otros datos personales, el nombre de la persona responsable y de testigos, así como otros datos que, relacionados entre sí, pudieran identificar a esas personas, los cuales constituyen información confidencial que debe protegerse en términos de los artículos 116 de la LGT, 113, fracción I, de la LFT y 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Para proceder a la elaboración de la versión pública de los documentos que es posible poner a disposición, se informa que en el **anexo 4** se indica el número de páginas que corresponde a cada documento y la cotización correspondiente, para que una vez que se informe que se realizó el pago, se proceda a elaborar la versión pública, toda vez que el costo de reproducción es mayor a cincuenta pesos.

También se tiene en cuenta que la versión pública de la resolución definitiva emitida por la autoridad resolutora en los 2 procedimientos concluidos (inciso e), es consultable en la liga electrónica <https://www.scjn.gob.mx/transparencia/consulta-informacion/personas-servidoras-publicas>, específicamente en el apartado de resoluciones, por lo que no se consideró en la cotización que se informa.

Ahora bien, para poner a disposición la versión pública de los documentos solicitados, es necesario considerar las cargas de trabajo que tiene la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas y que se trata de funciones que no es posible desatender, por lo que a partir de que se informe



que se hizo el pago, se generaría la versión pública correspondiente a 50 páginas por día.

*Esta precisión se hace porque se rebasan las capacidades materiales y técnicas de esta dirección general para atender la solicitud en un menor plazo, dado que, se reitera, implica la revisión física de los documentos para identificar los datos personales que contienen y no es posible dejar desatendidas el resto de las funciones que corresponden a la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas.*

[...]"

A dicho oficio acompañó 4 archivos en formato *PDF*, denominados "Anexo 1" y sucesivamente hasta el 4.

**IX. Remisión del expediente electrónico a la Secretaría del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Por oficio electrónico UGTSIJ/TAIPDP-4545-2023 de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Unidad General de Transparencia remitió el expediente electrónico a la cuenta electrónica institucional de la Secretaria del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que le asignara el turno correspondiente y se elaborara el proyecto de resolución respectivo.

**XII. Acuerdo de turno.** Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Presidente del Comité de Transparencia ordenó su remisión al Director General de Asuntos Jurídicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de integrante de dicho órgano, para que conforme a sus atribuciones procediera al estudio y propuesta de la resolución respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia), y 23, fracción II, y 27 del Acuerdo General de Administración 5/2015.

## CONSIDERANDO:

**I. Competencia.** El Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos

de los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y 23, fracciones II y III, del Acuerdo General de Administración 5/2015.

**II. Impedimento.** El Titular de la UGIRA hace valer su impedimento para resolver el presente asunto, puesto que en el trámite de la solicitud se pronunció sobre una parte de la información requerida.

En relación con el impedimento planteado, se debe señalar, en primer término, que se califica al emitir la presente determinación, sin necesidad de substanciarlo por separado, ya que ello implicaría mayor dilación y debe tenerse presente que de conformidad con los artículos 8, fracción VI, en relación con el 11 y el 13, así como 21 de la Ley General de Transparencia<sup>28</sup>, en la interpretación de la normativa aplicable en la materia se debe favorecer el principio de máxima publicidad, lo que conlleva adoptar las medidas necesarias para agilizar el trámite de los procedimientos respectivos.

En ese contexto, este Comité considera que se actualizan las causas de impedimento previstas en el artículo 35 del Acuerdo General de Administración 5/2015<sup>29</sup>, en virtud de que el Titular de la UGIRA se pronunció previamente sobre una parte de la información materia de la solicitud que nos ocupa.

**III. Análisis de la solicitud.** Como se advierte de los antecedentes, la persona solicitante requiere información en materia de responsabilidades administrativas como se esquematiza:

---

<sup>28</sup> “**Artículo 8.** Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

[...]

**VI. Máxima Publicidad:** Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

**Artículo 11.** Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

**Artículo 13.** En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

**Artículo 21.** Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley”.

<sup>29</sup> “**Artículo 35.** Los integrantes del Comité tienen la obligación de votar todos los asuntos que integren el orden del día.

De forma excepcional tienen el derecho y obligación de excusarse, exclusivamente en aquellos asuntos en los que de forma directa hayan firmado las clasificaciones de información como confidencial, reservada o inexistente que sean materia del asunto de discusión o se hubieren declarado incompetentes”.



- En una primera parte:
  - Investigaciones que han sido iniciadas por presuntas faltas administrativas, cantidad y número de expediente (puntos 1 a 3)
  - Acuerdos de conclusión y archivo (puntos 4 y 5)
  
- Para la segunda parte precisa que conforme a cada expediente administrativo se relacionen los siguientes datos:
  - (i) número de expediente
  - (ii) etapa procesal
  - (iii) fecha de inicio de la investigación
  - (iv) fecha de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves
  - (v) sentido de la resolución definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves
  - (vi) fecha de calificación de la falta administrativa grave, y fecha del envío del procedimiento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  - (vii) nombre completo de la persona física o moral sancionada
  - (viii) sexo de la persona sancionada,
  - (ix) falta administrativa grave o no grave, que se imputa
  - (x) tipo de falta administrativa grave o no grave, que se imputa
  - (xi) tipo de sanción impuesta
  - (xii) en caso de suspensión o inhabilitación temporal, fecha de inicio de la sanción
  - (xiii) en caso de suspensión o inhabilitación temporal, fecha de término o conclusión de la sanción y
  - (xiv) en caso de suspensión o inhabilitación temporal, período por el que se sancionó

- En la última parte de la solicitud, pide versiones públicas de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritos en los apartados anteriores, así como:
  - Denuncias interpuestas
  - Acuerdos de radicación con motivo del inicio de investigaciones administrativas
  - Acuerdos de calificación de faltas administrativas
  - Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
  - Acuerdos que contengan las sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves

El periodo señalado fue a partir de la entrada en vigor de la LGRA y hasta la fecha de la solicitud; sin embargo, manifestó que la información *detallada conforme a los puntos anteriores* (incisos de la parte 2) es del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Ahora, las instancias vinculadas, previamente a emitir pronunciamiento sobre los puntos de la solicitud, aclararon lo que se sintetiza enseguida:

- Ambas precisaron que la fecha de entrada en vigor de la LGRA fue al año siguiente a la del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y, efectivamente, distinto a lo expresado en la solicitud, tal fecha es 19 de julio de 2017<sup>30</sup>.
- **UGIRA:**
  - Derivado de las adecuaciones normativas, dicha Unidad General se creó a partir del Acuerdo General 1/2018 del veinte de febrero de dos mil dieciocho del Presidente de la Suprema Corte de

---

<sup>30</sup> "DOF: 18/07/2016

**DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa**

[...]

**TRANSITORIOS**

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

**Segundo.** [...]

**Tercero.** La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

[...]"

[subrayado propio]



Justicia de la Nación, de manera que únicamente cuenta con información relativa al ejercicio de las atribuciones conferidas a partir del momento en que cobró vigencia el Acuerdo General mencionado: 21 de febrero de 2018.

- **DGRARP:**

- A partir del 19 de julio de 2017 la DGRARP no realiza investigaciones, solo funge como autoridad sustanciadora.
- Del 19 de julio de 2017 al 20 de febrero de 2018 (creación de la UGIRA) la Dirección General de Auditoría (DGA) fue el área que llevó a cabo las investigaciones de responsabilidad administrativa en 3 expedientes, de conformidad con lo ordenado a través de un acuerdo presidencial.

Ahora, en cuanto a los datos requeridos en los incisos a), b) y c)<sup>31</sup> de la segunda parte de la solicitud, en relación con los numerales del 1 al 5 de la primera parte, la UGIRA únicamente proporciona datos para un expediente que tiene estatus de archivado, los que caen en el supuesto de en trámite o investigación susceptible de reabrirse, los clasifica como información reservada.

En tales condiciones, este Comité de Transparencia requiere a la UGIRA para que proporcione argumentos y razonamientos específicos que respalden la clasificación anunciada o, en su caso, se pronuncie sobre su disponibilidad.

El informe mencionado deberá emitirse en el término de diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, teniendo en cuenta el volumen de lo solicitado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 44, fracción I, de la Ley General de Transparencia y 23, fracción III, y 37, del Acuerdo General de Administración 5/2015.

<sup>31</sup> a) Número de expediente, b) Etapa procesal y c) Fecha de inicio de la investigación.

Finalmente, considerando que algunos datos que se plantean en la solicitud convergen en las diversas etapas que tienen los expedientes de responsabilidad administrativa, se resalta la necesidad de que este Comité cuente con los elementos necesarios para realizar el análisis integral y conjunto de los informes de ambas instancias, por tanto, una vez que se reciba el informe a que se refiere el párrafos anteriores, se llevará a cabo el análisis de las respuestas emitidas por las instancias vinculadas para atender la solicitud de origen.

Por lo expuesto y fundado, se

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Se califica como legal el impedimento del Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas en la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se requiere a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para los efectos señalados en esta determinación.

**Notifíquese** a la persona solicitante, a las instancias vinculadas, así como a la Unidad General de Transparencia y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Por unanimidad de votos lo resolvió el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por el licenciado Mario José Pereira Meléndez, Director General de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité y, maestro Christian Heberto Cymet López Suárez, Contralor del Alto Tribunal; quienes firman con la secretaria del Comité quien autoriza. Impedido el licenciado Adrián González Utusástegui, Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

**LICENCIADO MARIO JOSÉ PEREIRA MELÉNDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CT-CI/A-37-2023

**MAESTRO CHRISTIAN HEBERTO CYMET LÓPEZ SUÁREZ  
INTEGRANTE DEL COMITÉ**

**MAESTRA SELENE GONZÁLEZ MEJÍA  
SECRETARIA DEL COMITÉ**

"Resolución formalizada por medio de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), con fundamento en los artículos tercero y quinto del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en relación con la RESOLUCIÓN adoptada sobre el particular por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Sesión Ordinaria del siete de octubre de dos mil veinte."

YbIGydBaa3+PyqjSh54Mky39PIEgoGZir23kMpiyBU=